

DOS PRESTACIONES FUNDAMENTALES, A EXAMEN POR LOS CIUDADANOS

El apoyo a la sanidad contrasta con la negativa imagen de la educación

|| Nueve de cada 10 catalanes utilizan los servicios sanitarios públicos, defendidos por la mayoría

|| El sistema de enseñanza es valorado por el 27%, pero el 42% considera que es malo o muy malo

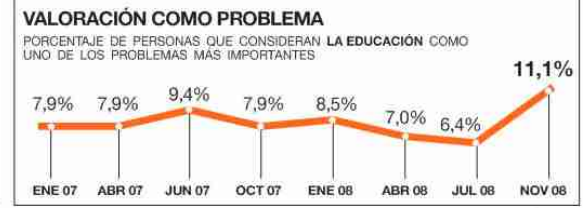
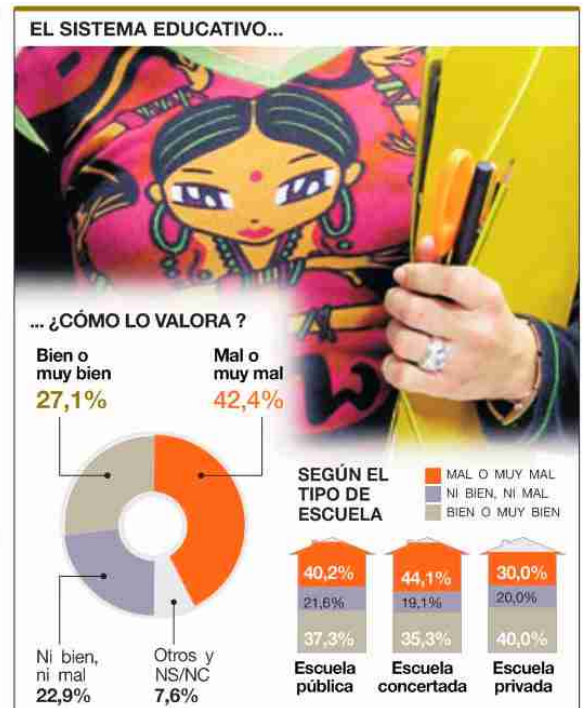
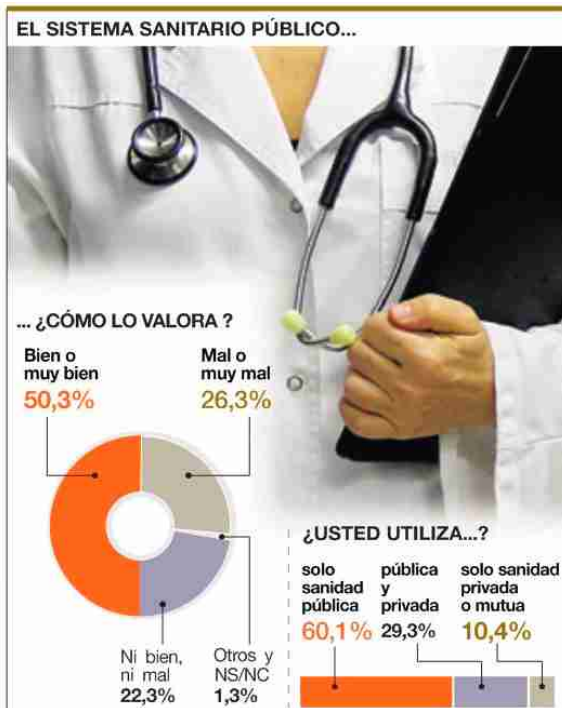
EL PERIÓDICO
BARCELONA

La sanidad y la educación son los dos grandes servicios que gestiona el Gobierno de la Generalitat y dan cuenta de las mayores partidas presupuestarias. Similares en importancia, presentan ante los ciudadanos imágenes bien distintas. Mientras que los servicios sanitarios públicos reciben un apoyo mayoritario de los catalanes, la enseñanza suscita más críticas que elogios, según recoge el Barómetro de otoño, elaborado por el Gabinet d'Estudis Socials i Opinió (GESOP) para EL PERIÓDICO.

La sanidad pública es utilizada por nueve de cada 10 catalanes, aunque tres de cada 10 la compaginen con el uso de la privada o de una mutua. De todos los encuestados, poco más de la mitad consideran que el sistema sanitario público es bueno o muy bueno, mientras que tan solo la cuarta parte cree que es malo o muy malo y otro tanto se muestra indiferente. La mejor valoración se da entre los que utilizan únicamente la sanidad pública, entre los votantes de la izquierda y entre los habitantes de la ciudad de Barcelona. Quienes peor consideración tienen del sistema público son los que solo usan el privado.

CRÍTICAS A LA EDUCACIÓN # Las cifras se invierten cuando los encuestados opinan sobre el sistema educativo, en el que no se ha hecho la distinción entre escuela pública, privada y concertada. Solo la cuarta parte de los entrevistados lo considera bueno o muy bueno y otro tanto se muestra indiferente, frente a más del 40% que lo definen como malo o muy malo. Los votantes de los partidos de derechas son los más críticos, así como los ciudadanos con un nivel de estudios alto.

Sin embargo, es significativo que el menor rechazo del sistema se da precisamente entre las personas que tienen hijos en la escuela. Entre aquellos que tienen pequeños en aulas de preescolar, son más los que apoyan el sistema educativo (36,6%) que los que lo rechazan (33,8%) mientras que los que tienen niños en edad escolar son más los críticos (42,5%) pero casi igualados con los satisfechos, que superan el 37%. El rechazo es muy alto entre los que tienen hijos menores de 3 años, probablemente por la falta de guarderías, y entre los que conocen el te-



ma a través de terceros o de los medios de comunicación, es decir, quienes no tienen hijos o si los tienen pero ya no están en edad escolar.

De la situación (mala para la mayoría), los encuestados responsabilizan casi por igual a la Administración y a los padres (ambos son citados en torno al 26%), mientras que el dedo acusador apenas incide sobre los maestros (7%) y los alumnos (5%). Es significativo que aquellos que tienen hijos en la concertada tienden a responsabilizar más a los padres, y los que envían a los suyos a la pública señalan más a la consejería. Los jóvenes son los más críticos con la administración y apenas citan a los maestros como responsa-

bles de la situación, mientras que los mayores de 60 años apuntan más contra los padres.

La preocupación por los temas educativos está en alza en Catalunya. Al pedir a los encuestados que enumeren los tres problemas más importantes, el paro y la crisis son los más citados, seguidos de la inmigración y la seguridad. Pero inmediatamente después, en quinto lugar, figura la preocupación por la enseñanza y la cultura. Es citada por el 11% de los entrevistados, mientras que hace un año preocupaba al 8% y hace medio, al 7%. La preocupación por la sanidad es algo menor: hace medio año estaba en el 5% y ahora, alcanza al 8% de los encuestados.

ficha técnica

EMPRESA RESPONSABLE
GESOP

↳ Técnica de investigación: entrevista telefónica asistida por ordenador (CATI en sus siglas en inglés).

↳ Ámbito geográfico: Catalunya.

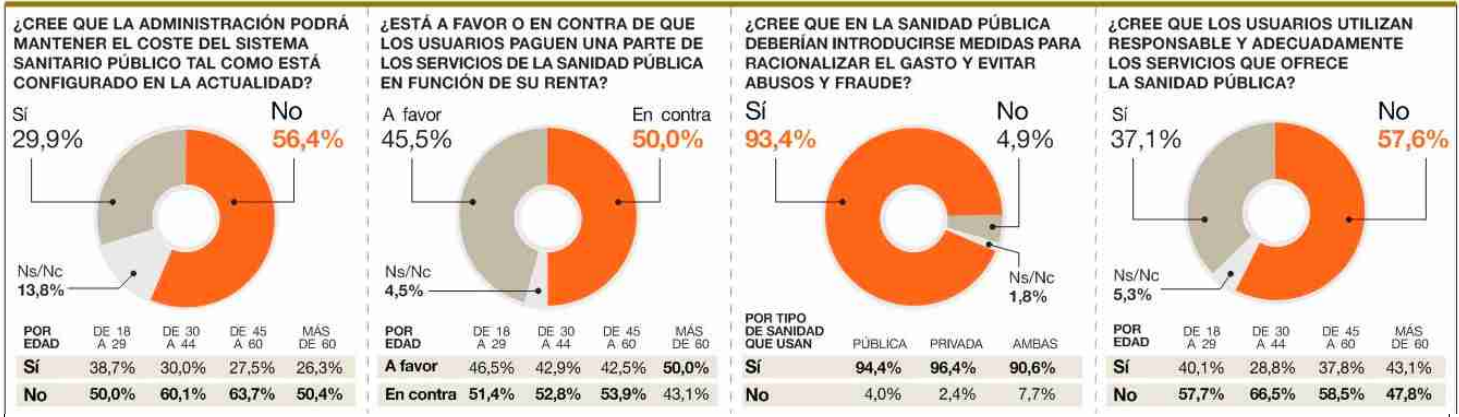
↳ Universo: población de 18 y más años con derecho a voto.

↳ Número de entrevistas: 800.

↳ Error de la muestra: +/-3,5% para un nivel de confianza del 95% y p=q=0,5.

↳ Tipo de muestreo: estratificado por dimensión del municipio, con selección aleatoria de los hogares y con cuotas cruzadas de sexo y edad para la selección de las personas a entrevistar.

↳ Trabajo de campo: se ha realizado entre los días 10 y 13 de noviembre del 2008.



LOS CATALANES Y EL SISTEMA SANITARIO

Casi la mitad de encuestados apoyan algún tipo de copago

El 40% acepta pagar un euro por visita y que algunos jubilados costeen las medicinas

El 56% cree que la sanidad pública no se podrá mantener como hasta ahora

EL PERIÓDICO BARCELONA

El 45% de los catalanes estarían dispuestos a pagar parte de los servicios que ofrece la sanidad pública. El 50%, en cambio, está en contra de que se suprima la gratuidad total. Sin embargo, pese a que la negativa a pagar proporcionalmente a la renta de cada usuario es ligeramente mayoritaria, el 56% asegura que no se podrá mantener indefinidamente el coste de la sanidad pública tal como está configurada actualmente.

Lo chocante es que todos los segmentos de encuestados están mayoritariamente de acuerdo en que el sistema está en peligro, pero cuando se propone que el usuario pague por los servicios un precio, todos los grupos según sexo, edad y nivel de instrucción se muestran mayoritariamente en contra, con la única excepción de los que tienen estudios medios, que están prácticamente empatados. Pese al pronunciamiento en contra, los que se muestran a favor del copago son en torno a la media general en todos los grupos: un sorprendentemente alto 45,5%.

Según el recuerdo de voto, no se produce la misma unanimidad en el conjunto de las respuestas: el copago es aceptado mayoritariamente por los votantes de ICV-EUiA (los

más a la izquierda), seguidos de los del PPC y los de CiU (derecha y centro derecha). Los electores de ERC y los del PSC están en contra, aunque los socialistas, con escasa diferencia entre unos y otros.

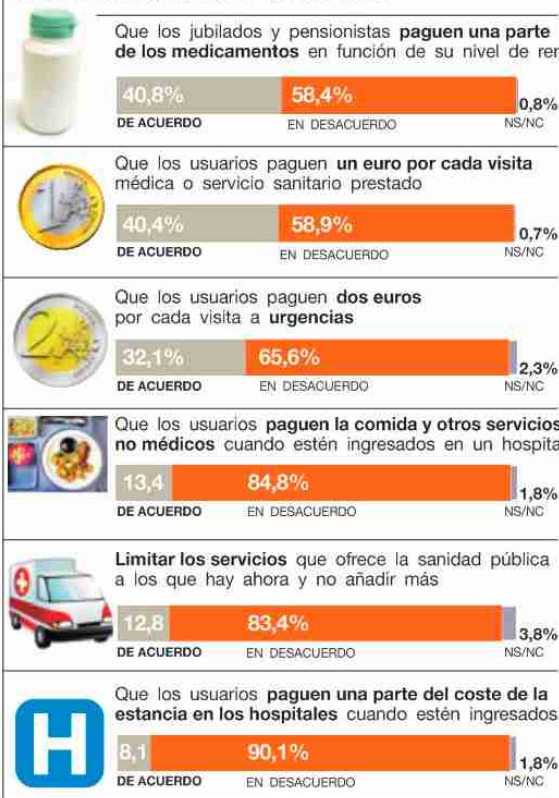
RACIONALIZAR EL GASTO / Cuando se pregunta si los usuarios utilizan con responsabilidad los servicios que ofrece la sanidad pública, el porcentaje de respuestas negativas se acerca al 60%, mientras los que dicen que su uso es responsable casi llegan a cuatro de cada 10.

Los mayores de 60 años, que según las estadísticas de la Seguridad Social son quienes mayor uso hacen de la sanidad pública, están entre los grupos más convencidos de que la utilización de los servicios es responsable. Pero aún se ven rebasados por los que tienen nivel de estudios bajo y los electores del PPC.

En lo que coinciden prácticamente la totalidad de los encuestados es en que se introduzcan en la sanidad pública medidas para racionalizar el gasto y evitar los abusos y el fraude. No llegan a cinco de cada 100 las respuestas que se muestran en contra de esa medida. Todos los grupos de catalanes, con la excepción de los electores del PPC, superan de sobras el 90% de respuestas afirmativas.

Los encuestadores, con una serie

¿ESTÁ DE ACUERDO O EN DESACUERDO CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS?



Fuente: Geosp

EL PERIÓDICO

de seis preguntas, pulsando la disposición de los entrevistados a contribuir a sufragar en parte el coste de la sanidad pública: ninguna de ellas es aceptada por la mayoría, pero el porcentaje de los que están a favor de algunas de las propuestas es notablemente elevado.

PASTILLAS DEL PENSIONISTA / Cuando se pregunta si se está de acuerdo con que los jubilados y pensionistas paguen una parte de los medicamentos que consumen en función de su nivel de renta (en la actualidad todos los pensionistas y jubilados tienen las medicinas gratis), casi seis de cada 10 están en desacuerdo, pero cuatro de cada 10 apoyan esta medida de copago. Entre los grupos de edades más favorables a pagar parte del precio de las medicinas figuran precisamente los encuestados que tienen más de 60 años, los directamente afectados. Los pacientes no jubilados ni pensionistas pagan ahora el 40% del precio de los medicamentos, salvo en el caso de los fármacos destinados a enfermedades crónicas, de los que se abona el 5%.

Prácticamente los mismos porcentajes a favor y en contra obtiene otra medida de copago de la que se ha hablado mucho: que los usuarios abonen un euro por visita médica o servicio sanitario recibido. Menos apoyo, apenas una tercera parte de los encuestados, están dispuestos a pagar dos euros por cada visita de urgencias, cuyo colapso, como se sabe, es habitual.

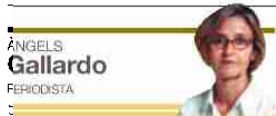
El resto de medidas de copago apenas obtienen apoyo. Ni la recientemente planteada idea de que los pacientes ingresados en los hospitales paguen por la comida u otros servicios no estrictamente médicos, ni la propuesta de que se abone parte de la estancia en el hospital tienen predicamento entre los ciudadanos. Los encuestados tampoco ven con buenos ojos que se limiten los servicios que ofrece la sanidad sin que se añada ninguno más en el futuro. =

Barómetro de otoño (y 2) ▶ El análisis

Páginas 2 a 7 ▶▶▶

Remedios de mal financiador

La sanidad catalana no recibe un presupuesto adecuado a la realidad actual



ÀNGELS
Gallardo
PERIODISTA

En una sociedad como la española, poco educada para valorar y hacer respetar lo que es de todos –y es de todos porque contribuimos todos–, donde dos generaciones de ciudadanos han crecido sabiendo que pueden ir a un gran hospital en el momento que lo crean necesario, y que allí les harán esperar pero los atenderán de forma correcta y sin pedir nada a cambio, la Administración siempre puede utilizar la observación de que los servicios de salud se usan, a veces, de forma excesiva o abusiva.

Este hecho, responsabilidad de gestores y usuarios, adquiere categoría superlativa cuando existe otra variable que hace explosiva la situación: empieza a no haber dinero para todo, y no se han creado mecanismos que permitan regular el tema. Y no hay dinero porque así se ha decidido que sea. No es lógico pensar que quienes diseñan los presupuestos sanitarios, y organi-

zan el reparto financiero para las comunidades autónomas españolas, desconozcan la situación de Catalunya. Y la de otras zonas de España.

Por encima del poco aprecio ciudadano por lo público o de los anacronismos de una estructura asistencial que se pensó cuando la mayoría de la población no llegaba a los 75 años y no venían inmigrantes existe un presupuesto sanitario inadecuado, escaso e impropio de las expectativas de una comunidad que pretende seguir viviendo bien. Mejorar, si es posible.

Sería bueno hacer coincidir ahora, por razones económicas, los objetivos de quien financia con los de médicos, enfermeras y usuarios. A nadie se le cerrará la puerta a un servicio de urgencias si acude con un impreciso lumbago, ya que, ciertamente, el malestar podría ser el síntoma inicial de un proceso mortal a corto plazo. No será así en un alto porcentaje de casos, pero descartar el peligro con la tecnología de un gran hospital tiene un coste insufrible para una economía empobrecida, como la de la sanidad catalana.

De existir filtros asistenciales efi-

caces y más baratos –centros de salud de barrio, dotados de tecnología para hacer una atención de urgencia– muchos de esos usuarios no llegarían al hospital. Irían los que lo precisan y serían mejor atendidos. La Conselleria de Salut intenta ganarse la confianza de los ciudadanos para que acudan a una tímida red de centros de ese tipo, insuficiente.

Este es solo uno de los agujeros

Empieza a no haber dinero para todo, y no hay mecanismos para regular la situación

que se podrían tapar para contener el gasto sin perjudicar la calidad de la asistencia, o incluso beneficiándola. Ideas no faltan, y sería bueno manejarlas con inteligencia y siempre a favor de quienes utilizan el sistema público de salud, personas que, como se observa en el Barómetro, son las menos predispuestas a que algo cambie. También son las que más satisfechas se sienten con lo que hay, y



▶▶ Gotero aplicado a un enfermo.

las que tienen una peor economía.

Cobrar un euro por visita al centro de asistencia primaria, otra de las iniciativas que van y vienen entre debates y desmentidos políticos, no salvaría las arcas del Estado pero, en opinión de muchos, contribuiría a convertir en trazos negros los números del coste sanitario que ahora parecen estar escritos con tinta invisible. Los médicos de familia conocen bien a esos hombres y mujeres que les piden hora de visita tres veces por semana, buenas personas que esperan del ambiente sanitario lo que no les puede dar. No son muchos.

Quienes más apoyan cualquier idea de cofinanciación son los sectores que menos utilizan la sanidad pública porque disponen de buena renta y están afiliados a una mutua médica. El tema requiere honestidad política y decisión. La amenaza, casi siempre negada acto seguido, de que el «mejor sistema sanitario del mundo», como se califica al nuestro, está en peligro porque es insostenible, deambula por los despachos de quienes quieren gobernar bien sin coste de votos.

Tal vez, en previsión de tiempos peores, sería bueno blindar los servicios esenciales, e incluir ahí todas las especialidades médicas y las técnicas terapéuticas eficaces. Entretanto, los Gobiernos deberán decidir si están dispuestos a mantener una buena sanidad pública. =